TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
NAYARIT

Expediente: TEE-AP-14/2026

Recurso de Apelación

Expediente: TEE-AP-14/2026.

Parte actora: Héctor Javier Santana García.

Autoridad responsable: Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit[1].

Magistrada ponente: Martha Marín García.

Magistrada encargada del engrose: Selma Gómez Castellòn.

Secretario: Raúl Alejandro Sandoval Rodela.

Tepic, Nayarit, a trece de octubre de dos mil veintiséis[2].

Sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit[3] que **revoca de forma lisa y llana** el acuerdo **IEEN-CLE-030/2026** por el que el Consejo Local resolvió el procedimiento ordinario sancionador **IEEN-DJ-POS-007/2025.**

R E S U L T A N D O S

I. Antecedentes.

Del expediente se advierte lo siguiente:

1. **Denuncia.** El nueve de junio, el ciudadano **Alexis Samir Villareal Vargas** presentó ante el **Instituto Estatal**

1 En adelante también Consejo Local o autoridad responsable.
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinticinco, salvo mención expresa.
3 En adelante también Tribunal u órgano jurisdiccional.

ACTUALIS

Electoral de Nayarit[4] denuncia en contra de **Héctor Javier Santana García,** presidente municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, y del representante legal de Stereo Vida -emisora del grupo Radiorama-, por la probable infracción de promoción personalizada.

2. Recepción, reserva del inicio o desechamiento y diligencias preliminares. El veintisiete de junio, se acordó la recepción de la denuncia, se registró con el número de expediente IEE-DJ-POS-007/2025, se reservó a proveer sobre la admisión o desechamiento hasta que se contara con los elementos necesarios para la determinación y se ordenaron diligencias preliminares con la finalidad de certificar el contenido de los enlaces electrónicos -URL- proporcionados por el denunciante.

3. Inicio del procedimiento ordinario sancionador IEEN-DJ-POS-007/2025. Mediante proveído de veintiséis de agosto se admitió el citado procedimiento ordinario sancionador.

4. Conclusión de etapa de investigación y apertura de alegatos. El veintiuno de octubre, la encargada del despacho de la Dirección Jurídica del IEEN emitió acuerdo por el que cerró la etapa de investigación y abrió el periodo de alegatos.

5. Resolución (acto impugnado). El nueve de marzo de dos mil veintiséis, el Consejo Local emitió el acuerdo IEEN-CLE-030/2026 por el que resolvió el procedimiento ordinario

4 En adelante también IEEN.

sancionador IEEN-DJ-POS-007/2025. En dicha resolución, declaró la existencia de la infracción de promoción personalizada atribuida a **Héctor Javier Santana García**, en su carácter de presidente municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, a quien además impuso una multa. Por su parte, declaró la inexistencia de la diversa persona denunciada.

6. Medio de impugnación. Inconforme con lo anterior, el dieciocho de marzo pasado **Héctor Javier Santana García**[5] presentó ante el IEEN demanda en vía de recurso de apelación, de la que se dio aviso oportuno a este Tribunal.

7. Sustanciación. Por proveído de la misma fecha, la magistrada presidenta de este órgano jurisdiccional acordó la recepción del citado aviso y ordenó el registro del asunto como expediente **TEE-AP-14/2026**. Enseguida, por diverso acuerdo de veintitrés de marzo, ordenó su turno a la ponencia de la magistrada **Martha Marín García**, en donde se radicó el día veinticinco siguiente. El uno de octubre anterior, se admitió el medio de impugnación y se cerró instrucción, quedando los autos en estado de resolución.

8. Sesión. En sesión de trece de octubre del año en curso, por mayoría de votos no se aprobó el proyecto de resolución, y se ordenó elaborar el engrose respectivo con las consideraciones de esa mayoría, lo que correspondió a la magistrada **Selma Gómez Castellón**.

ACTUAL

5 En adelante también actor, apelante o parte apelante.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[6]; 105, 106.3 y 111 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 135, apartado D, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 5º, 8º, 22, 68, fracción III, 70, 72 y demás relativos de Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit[7].

Lo anterior, al impugnarse la declaración de existencia de infracción a la Ley Electoral del Estado de Nayarit[8] y la aplicación de sanciones administrativas.

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad.

El recurso de apelación cumple con los requisitos previstos en los artículos 25, 26, 27, 68 y 69 de la Ley de Justicia Electoral, en los términos siguientes:

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable y en ella consta: el nombre y la firma autógrafa del promovente, los hechos materia de la impugnación, los agravios que causa el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados.

---

6 En adelante también CPEUM o Constitución General.
7 En adelante también Ley de Justicia Electoral.
8 En adelante también Ley Electoral.

b) Oportunidad. Se satisface este requisito, porque el plazo legal de cuatro días para impugnar se integró por el doce, trece, diecisiete y dieciocho de marzo, y la demanda se presentó este último día. Lo anterior, tomando en cuenta que el acto impugnado se emitió el nueve de marzo, el actor señala que se le notificó el día once siguiente y no se toman en cuenta los días inhábiles, el dieciséis de marzo por así haber sido declarado por este Tribunal[9], y los días catorce y quince por ser sábado y domingo, respectivamente, pues el acto impugnado no tiene lugar dentro de proceso electoral. Ilustra lo anterior, la siguiente tabla:

Marzo 2025									
Lunes 9	Martes 10	Miércoles 11	Jueves 12	Viernes 13	Sábado 14	Domingo 15	Lunes 16	Martes 17	Miércoles 18
Resolución impugnada		notificación	Dia uno	Dia dos	inhábil	inhábil	inhábil	Dia tres	Dia cuatro Presentación de la demanda

c) Legitimación e interés jurídico. Se satisface este requisito, toda vez que se trata de la persona a quien se le atribuye la infracción en su carácter de presidente municipal de Bahía de Banderas, Nayarit y se le impone la multa dentro del procedimiento de origen.

d) Definitividad. Este requisito de procedibilidad se satisface, en atención a que el acto reclamado no admite medio de defensa alguno que deba de ser agotado previamente.

TERCERO. Tercero interesado

En el caso, comparece el ciudadano **Alexis Samuel Villareal Vargas** a solicitar se le reconozca el carácter de tercero interesado.

9 En términos del acuerdo plenario TEE-P-36/2025.

Del análisis de su escrito, se colige que satisface los requisitos establecidos en los artículos 39, fracción II y 40 de la Ley de Justicia Electoral, como se muestra enseguida:

Forma. La solicitud se presentó por escrito, en ella consta nombre y firma autógrafa, y contiene las razones en que funda sus intereses.

Legitimación. El promovente comparece en su carácter de denunciante del procedimiento sancionador de origen, por lo que está legitimado.

Interés jurídico. De igual manera, expone un derecho incompatible al del actor que pretende la revocación del acto impugnado, mientras aquel busca su confirmación.

Oportunidad. Finalmente, el escrito de tercería es oportuno, luego que se presentó dentro del plazo de publicidad de cuarenta y ocho horas[10].

En consecuencia, se reconoce el carácter de tercero interesado al ciudadano **Alexis Samir Villareal Vargas.**

CUARTO. Causales de Improcedencia

La autoridad responsable no invocó ninguna causal de improcedencia y este Tribunal de oficio no las advierte, por lo que

10 El medio de impugnación se publicó a las 10:00 horas del 19 de marzo y se retiró a las 10:00 horas del día 23 de marzo. Por su parte, el escrito de tercería se presentó a las 11:54 horas de día 19 de marzo. Todos del 2026.

procede el análisis de fondo.

QUINTO. Síntesis de agravios

Del análisis integral del escrito de demanda se desprende que la parte apelante hace valer, esencialmente, como motivos de reproche, lo siguientes:

- Indebida valoración de los spots (agravios primero y segundo);
- Indebida valoración del contexto (agravio tercero);
- Indebida valoración del elemento temporal (agravio cuarto);
- Indebida motivación y violación a los principios de legalidad y tipicidad al no acreditarse todos los elementos de la falta (agravio quinto);
- Indebida motivación ante la falta de los elementos objetivo y personal, de la prueba, del nexo causal, y violación a la presunción de inocencia (agravio sexto);
- Indebida motivación y atipicidad al concluir la actualización del artículo 221, fracción III, de la Ley Electoral (agravios séptimo, octavo, noveno y décimo primero);
- Violación al principio de legalidad porque en la fe de hechos se asentaron cuestiones técnicas (agravio octavo);
- Indebida fundamentación y motivación, así como falta de exhaustividad, al no indicar los elementos que sostienen la

ACTUACIONES

falta (agravio décimo), la responsabilidad (agravio décimo sexto) y la violación del principio de imparcialidad (agravio décimo segundo);

- Indebida motivación y violación a los principios de legalidad, defensa adecuada, contradicción e imparcialidad, en la práctica de la fe de hechos (agravio décimo tercero);

- Violación al principio de legalidad porque la fe de hechos no es un medio admisible (agravio décimo quinto);

- Incompetencia de la autoridad responsable para imponer sanción (agravio décimo séptimo); e,

- Indebida fundamentación y motivación de la multa (agravio décimo octavo).

Por ello, considera que tales deficiencias vulneran en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1°, 14, 16, 41, 133, 134 de la Constitución General, así como lo previsto en los artículos 1º, 2º, 8º y 9º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

SEXTO. Pretensión y precisión de la litis

De la lectura integral del escrito de demanda[11] se obtiene que la pretensión del actor es que se revoque el acuerdo **IEEN-CLE-030/2026** por el que el Consejo Local resolvió el procedimiento ordinario sancionador **IEEN-DJ-POS-007/2025**.

---

11 De acuerdo al artículo 42, fracción II, de la Ley de Justicia Electoral. Es aplicable la jurisprudencia 4/99 de la Sala Superior, de rubro: **MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE DE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR**.

La causa de pedir se sustenta en que existen violaciones procesales, no se acredita la falta y la responsabilidad del actor, y es indebida la imposición de la sanción, con lo que el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado, y violenta las garantías de debido proceso, legalidad, exhaustividad, seguridad jurídica, tipicidad y presunción de inocencia.

La litis se circunscribe a determinar si asiste razón a la parte actora respecto de los aspectos que controvierte del acto impugnado.

SÉPTIMO. Pruebas y su valor jurídico

Por cuanto a las **pruebas documentales** que les fueron admitidas a las partes, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto ofrecidas por la parte actora, las cuales fueron desahogadas por este órgano jurisdiccional por acuerdo de uno de octubre de dos mil veintiséis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 y 38 de la Ley de Justicia Electoral, se concede valor probatorio pleno a las documentales públicas y a la instrumental de actuaciones, dada su propia naturaleza, para acreditar la existencia del acto impugnado.

En cuanto a la **presuncional en su doble aspecto, legal y humana,** se deducirá del ejercicio intelectivo que lleva a cabo este órgano jurisdiccional en la presente resolución.

ACTUACIONES

Lo anterior, con independencia de su eficacia probatoria o demostrativa, esto es, de la efectividad o éxito que tengan para acreditar la pretensión del oferente[12].

OCTAVO. Metodología

Los agravios se pueden reunir en tres grupos: **a)** las violaciones procesales y formales; **b)** los que se dirigen a combatir la actualización de la falta y la responsabilidad; y **c)** los tocantes a la sanción.

En ese orden se realizará su estudio, lo cual atiende a su prelación lógica, pues de resultar fundados los previos, haría innecesario el estudio de los restantes, sin que la metodología ocasione perjuicio alguno al actor[13].

NOVENO. Estudio de fondo

1. Decisión.

A juicio de este Tribunal, unos agravios son **inoperantes e infundados,** y otros **esencialmente fundados y suficientes** para revocar de forma lisa y llana el acto impugnado.

2. Marco jurídico.

---

12 Es orientadora la tesis III.2o.C.47 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, agosto de 2020, Tomo VI, página 6215, de rubro: **PRUEBAS. SU VALOR SE VINCULA CON EL MEDIO DE CONVICCIÓN EN SÍ MISMO EN CUANTO A SU CAPACIDAD DE PROBAR, PERO ELLO NO DETERMINA LA EFICACIA DEMOSTRATIVA PARA ACREDITAR LO PRETENDIDO POR EL OFERENTE.**

13 Es aplicable la jurisprudencia 4/2000 de la Sala Superior, de rubro: **AGRAVIOS, SU EXÁMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.**

- **Fundamentación y motivación**

El artículo 16, párrafo primero, de la Constitución General establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Fundar implica indicar la norma jurídica aplicable, y motivar exponer las causas o razones inmediatas de por qué se actualiza en el caso concreto.

En ese sentido, hay indebida fundamentación y motivación cuando los preceptos jurídicos y las razones expuestas, respetivamente, no corresponden al caso en estudio[14].

- **Infracciones que derivan del artículo 134 de la Constitución General**

Del artículo 134 de la Constitución General[15], se obtienen las siguientes infracciones: **a)** Del párrafo séptimo, la vulneración al principio de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observar las personas servidoras públicas: **b)** Del párrafo octavo, promoción personalizada[16].

Por su parte, el artículo 221 de la Ley Electoral, en sus fracciones III y IV, establece como infracciones de las autoridades y servidores públicos las siguientes:

> Artículo 221.- Constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes del Estado y de los

14 Tesis 260 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el apéndice de 1995, tomo VI, parte SCJN, página 175, registro digital 394216, de rubro: **FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN**.
15 Por reformas de 2026, se modificó el artículo 134 constitucional, por lo que debe ajustarse la numeración de los párrafos: los párrafos que se citarán como séptimo y octavo, ahora corresponden al noveno y décimo. Para lo anterior, debe tomarse en cuenta que los hechos corresponden a 2025.
16 Jurisprudencia de la sala Superior 3/2011, de rubro: **COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL**.

municipios, órganos autónomos locales, y cualquier otro ente público a la presente ley:

...

III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;

Principio de imparcialidad, equidad y neutralidad

En el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución General se dispone el principio de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observar los servidores públicos en la aplicación de los recursos públicos y en su conducta misma, sin influir en las contiendas electorales.

En primer término, de la interpretación literal del séptimo párrafo que se analiza, se desprende que se refiere al uso indebido de recursos públicos, sin embargo; también se contemplan las conductas por la cuales se presione, coaccione, incida o influya de forma indebida en el electorado. Es corolario de lo anterior que, existe un deber de abstención por parte de los servidores públicos, que puede trastocarse a manera de ejemplo, mediante expresiones, participaciones o asistencia a eventos proselitistas que puedan influir en la contienda y se equipara a la indebida utilización de recursos públicos.

Este principio de neutralidad tiene relación con el artículo 41 de la Constitución General, que dispone que el voto, entre otros atributos, debe ser libre, y las elecciones libres y auténticas, tal y como lo ha concluido la Sala Superior en la tesis V/2016, de rubro: **PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD. LO DEBEN OBSERVAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN DE COLIMA)**[17].

Finalmente, la misma superioridad ha considerado que el principio debe observarse en todo tiempo, pero con mayor diligencia en el curso de los procesos electorales.

Promoción personalizada

Por su parte, el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución General, señala que la propaganda gubernamental deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Además, establece que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Al respecto, en la jurisprudencia 12/2015[18], la Sala Superior estableció el test de tres elementos para identificar la promoción personalizada.

Ahora bien, como lo ha indicado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, **la infracción relativa a promoción personalizada del servidor público se encuentra necesariamente**

17 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 108, 109 y 110.
18 De rubro: **PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA**. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Año 8, Número 2015, páginas 28 y 29.

inmersa en la propaganda gubernamental (institucional) [19].

Por tanto, en primer lugar, debe analizarse si se trata de propaganda gubernamental (institucional), para posteriormente verificar si en ésta se incluyó nombre, imagen, voz o símbolos **que impliquen promoción personalizada** de un servidor público, y entonces, analizar los elementos, personal, objetivo y temporal.

Sobre este tema, debe mencionarse que si bien la Constitución General, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Comunicación Social no definen qué debemos entender por propaganda gubernamental, lo cierto es que la Sala Superior ha desarrollado su concepto y sus características.

En un primer momento, sobre la base de lo prescrito en el artículo 134 de la Constitución General, la Sala Superior consideró que la propaganda gubernamental podía ser entendida como aquella que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundieran los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno[20].

Posteriormente, se amplió el concepto a partir de una interpretación teleológica, identificando también al sujeto emisor o responsable y a su contenido, de forma tal que la propaganda gubernamental supone cualquier forma de comunicación cuyo emisor sea un poder público, **siempre que esté destinada a difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno**.

---

19 La Sala Superior en la sentencia SUP-PSC-29/2026 y la Sala Regional Guadalajara en la sentencia SG-JE-054/2024.
20 En esos términos lo establece el artículo 143, fracción VII, de la Ley Electoral.

Así lo precisó, al resolver el expediente SUP-RAP-119/2010 y acumulados, al señalar que debe entenderse como propaganda gubernamental, la difundida por los poderes federales, estatales y municipales, y que constituyen el conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo los servidores o entidades públicas que tengan como finalidad difundir para el conocimiento de la ciudadanía la existencia **de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno para conseguir su aceptación**.

3. Justificación.

Agravios sobre violaciones procesales y formales

Son **inoperantes** los agravios por los que se busca evidenciar violaciones procesales.

- **Práctica de prueba, agravio décimo tercero (13)**

El actor señala que no se le notificó de la fe de hechos de 30 de julio de 2025, para asistir a su práctica. Al no hacerlo, se violenta en su perjuicio el principio de legalidad, defensa adecuada, contradicción e imparcialidad[21].

El agravio es **inoperante** porque parte de una premisa falsa[22], pues no existe obligación o derecho de citar a las partes a la práctica

21 Previstos en los artículos 14, 16 y 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución General, y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
22 Tesis 2a./J. 108/2012 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIII, octubre de 2012, tomo 3, página 1326, de rubro: **AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS**.

o elaboración de las actas de fe de hechos de la Oficialía Electoral del IEEN[23].

En todo caso, la garantía de audiencia, en su núcleo esencial de formalidades esenciales del procedimiento, se logra con el emplazamiento en el que se informa la causa legal del procedimiento y se otorga oportunidad de contradecir, probar y alegar[24].

En el caso, se aprecia que se garantizaron esos derechos al actor[25].

Por su parte, el derecho a una defensa adecuada con previsión constitucional para la materia penal (artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución General), no resulta aplicable al procedimiento sancionador electoral, pues no existe disposición en la materia que lo prevea. Así lo ha determinado la Sala Superior[26] y este órgano

---

23 La Ley Electoral, el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y el Reglamento de Funcionamiento de la Oficialía Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, no establecen dicha obligación

24 De acuerdo con la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo II, diciembre de 1995, página 133, registro digital 200234, de la interpretación del artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución General, se desprende que las formalidades esenciales del procedimiento son las siguientes: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

25 Tutelado en los artículos 237, 239 y demás relativos de la Ley Electoral

Artículo 237. Admitida la queja o denuncia, la Dirección Jurídica del Instituto Estatal o en su caso el Secretario del Consejo Municipal correspondiente, **emplazará al denunciado**, sin perjuicio de ordenar las diligencias de investigación que estime necesarias. Con la primera notificación al denunciado **se le correrá traslado con una copia de la queja o denuncia, así como de las pruebas** que, en su caso, haya aportado el denunciante o hubiera obtenido a prevención la autoridad que la recibió, concediéndole un plazo de cinco días para que conteste respecto a las imputaciones que se le formulan. La omisión de contestar sobre dichas imputaciones únicamente tiene como efecto la preclusión de su derecho a ofrecer pruebas, sin generar presunción respecto a la veracidad de los hechos denunciados.

...

Artículo 239.- Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la Dirección Jurídica del Instituto Estatal o en su caso el Secretario del Consejo Municipal correspondiente, pondrá el expediente a la vista del quejoso y del denunciado para que, en un plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, procederá a elaborar el proyecto de resolución correspondiente, en un término no mayor a diez días contados a partir del desahogo de la última vista...

26 En la sentencia SUP-REP-663/2023, la Sala Superior consideró:

jurisdiccional[27].

Lo anterior, con la precisión que dicha garantía de carácter penal, implica la asistencia de una persona especialista en esa rama del derecho, lo que es distinto a tener derecho a un debido proceso, derecho fundamental del que goza toda persona en nuestro país.

- **Admisión de prueba, agravio décimo quinto (15)**

De otra parte, el actor expone que indebidamente se admitió la fe de hechos, luego que no está prevista como medio de prueba en el artículo 229 de la Ley Electoral.

Es **inoperante** el motivo de disenso porque parte de una premisa falsa[28], pues la fe de hechos es un documento, el que, al haber sido elaborado por personas servidoras públicas habilitadas para ello por el orden jurídico[29] tiene el carácter de documental pública[30], y esta se encuentra prevista en la fracción I del citado artículo 229 de la Ley Electoral[31].

Por tanto, fue conforme a derecho su admisión dentro del procedimiento de origen.

Además, esta Sala Superior ha sostenido que el principio penal contenido en el artículo 20 de la Constitución general de contar con una asistencia o representación legal durante cualquier juicio, no resulta aplicable al procedimiento sancionador.
Esto último sobre el argumento de que la normativa electoral no prevé algún deber de la autoridad administrativa instructora del procedimiento de hacer del conocimiento de los sujetos a un procedimiento sancionador, por la comisión de una violación a la constitución y ley electoral, que se tiene derecho a una defensa adecuada por un abogado.

27 En igual sentido que la Sala Superior lo resolvió este Tribunal en el expediente TEE-PES-02/2025.

28 Tesis 2a./J. 108/2012 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIII, octubre de 2012, tomo 3, página 1326, de rubro: **AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS**.

29 De acuerdo al artículo 27 del Reglamento para el Funcionamiento de la Oficialía Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.

30 De conformidad con el artículo 229 de la Ley Electoral.

31 En el párrafo tercero de dicho precepto se reconocen los siguientes medios de prueba: **I. Documentales públicas;** II) Documentales privadas; III) Técnicas; IV) Pericial contable; V) Presunción legal y humana; y VI) Instrumental de actuaciones.

➢ **Indebida valoración de prueba, agravio octavo (8)**

Finalmente, en este apartado, en una porción del agravio octavo el actor sostiene que indebidamente se otorgó valor a la fe de hechos -IEEN/OE/032/2025-, pues se excedieron las facultades al emitirse juicios, como la afirmación de que es su voz la que aparece en el spot, lo cual es una cuestión técnica y contraviene el artículo 28 del Reglamento para el Funcionamiento de la Oficialía Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit[32].

El agravio es **inoperante** porque el acto impugnado no tiene por actualizada la infracción electoral por la razón de que en el spot aparezca la voz del denunciado. Esto es, la resolución combatida no se sostiene en que sea la voz del aquí actor, de ello que la violación intraprocesal alegada no trascendió al resultado del fallo.

Agravios que combaten la actualización de la falta y la responsabilidad

Por una parte, los agravios son **inoperantes e infundados,** y por otra, **esencialmente fundados**.

La autoridad responsable concluye que se actualiza la promoción personalizada, de la cual es responsable el ciudadano **Héctor Javier Santana García**, presidente municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, a quien por ello le impone una multa como sanción.

Lo anterior, por la consideración que, **en dos spots de radio**

32 Artículo 28. La servidora o el servidor público electoral encargado de la diligencia sólo podrá dar fe de los actos y hechos que puedan ser percibidos por los sentidos y no podrá emitir conclusiones ni juicios de valor acerca de los mismos, o aquellos que requieran el conocimiento de un arte, técnica o ciencia específica. (Énfasis añadido)

contratados por el Ayuntamiento, difundidos uno de ellos el 12 y 31 de mayo, y el otro del 3 al 28 de marzo, ambos de 2025, **se hizo alusión al nombre del denunciado, aquí actor**, lo que "sin duda tuvo la intención de posicionarlo como una opción ante política ante los ciudadanos del Estado de Nayarit, de cara a la elección al proceso local ordinario 2027 en el que se renovarán la totalidad de las autoridades del Estado de Nayarit".

Por su parte, el actor formula diversos agravios para combatir la actualización de la falta electoral y su responsabilidad, esencialmente por lo siguiente:

- **Discrepancia entre contratación y difusión**
  - Existe diferencia entre la persona a la que contrató y pagó el Ayuntamiento y la que realizó la difusión. Además, el contrato no está firmado por las autoridades municipales competentes, por lo que es nulo (agravios sexto y décimo segundo);

- **No se acreditan todos los elementos de la falta**
  - Se realiza una indebida valoración de ambos spots, **pues es insuficiente que aparezca su nombre** (agravios primero, segundo y quinto), porque para ello es necesario se acrediten los elementos objetivo y temporal de la infracción, lo que no acontece en el acto impugnado (agravios primero, segundo, tercero y sexto).
  - En el spot de obra pública, se difunden acciones de gobierno de carácter informativo (agravio primero).
  - En el spot de felicitación del día de las madres, no se trata

de propaganda gubernamental sino comunicación institucional de carácter social; no hay referencias a logros personales, acciones de gobierno atribuibles, programas públicos específicos o resultados de gestión que pudieran interpretarse como autoelogio o posicionamiento político (agravios segundo y sexto).

- No se analiza debidamente el contexto, luego que **no existen elementos de carácter electoral**, como lo sería la concurrencia de un proceso electoral - las conductas son de 2025, fuera del proceso electoral ordinario de 2027-, la promoción y postulación de una candidatura o solicitud de apoyo o rechazo a una opción político-electoral (agravios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo segundo y décimo cuarto).

➢ **Atipicidad**

- No se actualiza el tipo administrativo previsto en el artículo 221, fracción III, de la Ley Electoral que la responsable señala se infringió, pues dicho precepto establece que la conducta debe acontecer durante el proceso electoral y las conductas del procedimiento son fuera de él -2025- (agravios séptimo, octavo, noveno y décimo primero).

➢ **No se indican los medios de prueba**

- No se indican las pruebas que acreditan la actualización del tipo previsto en el artículo 221, fracción III, de la Ley Electoral (agravio décimo), el principio de imparcialidad (agravio décimo segundo) y la responsabilidad (agravio décimo sexto).

- **El actor no ordenó o aprobó el contenido de los spots contratados por el Ayuntamiento -participación directa-** (agravio sexto).

- **Es indebida la consideración de que el actor no desacreditó o desvirtuó los señalamientos en su contra** (agravio sexto).

Es **inoperante** lo relativo a que existe diferencia entre la persona a la que contrató y pagó el Ayuntamiento, y la que realizó la difusión.

Ello, porque esa diferencia no alcanza a desvirtuar la existencia de la difusión, y esta es el elemento sustancial en que descansan los hechos de la infracción. Así, al no impugnarse la consideración principal de la existencia de los spots, el motivo de disenso es inoperante[33].

De otra parte, es **fundado** lo relativo a que el spot del día de las madres no actualiza promoción personalizada, porque no es propaganda gubernamental.

En efecto, la infracción de promoción personalizada tiene como presupuesto lógico, previo y necesario la existencia de propaganda gubernamental, tal y como se obtiene de la letra del artículo 134 de la

33 Orienta la decisión, la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIII, octubre de 2012, tomo 2, página 731, registro digital 159947, de rubro: **AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA.**

ACTUACIONES

Constitución General[34] y de precedentes[35]. Así, si el citado spot del día de las madres no publicita **algún logro, acción, obra o medida de gobierno para conseguir su aceptación**, de la forma que lo señala la sentencia SUP-RAP-119/2010 de la Sala Superior, no se trata de propaganda gubernamental.

Por el contrario, como atinadamente lo expone el actor, es comunicación de carácter social, una felicitación por un día conmemorativo nacional, el día de las madres, la cual realiza el alcalde de Bahía de Banderas, Nayarit, como se puede apreciar de su transcripción[36]:

> Habla el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana. A todas las mamás hoy en su día, quiero decirles gracias por ser el corazón de cada hogar, por su fuerza diaria, por enseñarnos a luchar y a no rendirnos nunca. Como hijo, como esposo y como papá de tres hijas, sé bien que una madre cambia el mundo desde su casa. Hoy les digo cuentan conmigo y con respeto y con todo el cariño, les deseo feliz día de las madres Amigo Héctor Santana (sic)…

Sirve de apoyo, el precedente SUP-REP-541/2015 de la Sala Superior, en donde se concluyó que una invitación a un festejo por el día de las madres no constituye propaganda gubernamental. No fue obstáculo a lo anterior, que en dicha comunicación aparecía el nombre y la imagen de un senador.

---

34 El artículo 134 (hoy párrafo décimo, antes octavo) establece disposiciones sobre propaganda gubernamental: **La propaganda**, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso **esta propaganda** incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. (énfasis añadido).

35 Así se estableció en el marco jurídico de esta resolución al citar la sentencia SG-JE-054/2024 de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la sentencia SUP-PSC-029/2026 de la Sala Superior -véase párrafo 95 y sucesivos.

36 A foja 4 del acto impugnado.

A juicio de este Tribunal, una felicitación por el día de las madres no constituye propaganda gubernamental, y, por tanto, no es susceptible de actualizar promoción personalizada, de ello la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado por cuanto a ese spot.

Al mismo tiempo, por cuanto, a ambos spots, es **infundado** que no se acredita el elemento personal, y **esencialmente fundado** que no se acreditan los elementos temporal y objetivo.

Del acto impugnado, se advierte que la responsable tiene por acreditada la falta con la circunstancia de que los hechos ocurrieron fuera del proceso electoral ordinario 2027, y por la alusión del nombre del actor y, a partir de este, concluye su finalidad electoral.

Así se advierte de la siguiente transcripción, donde consta el razonamiento esencial del acto impugnado:

> En consecuencia, si el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, contrató con la persona moral YHPY-FM S.A de FM, tiempo de radio para que por medio de la estación 93.3 de FM, se difundieran dos "spots", el primero alusivo al día de las madres y el segundo para destacar el liderazgo del Ciudadano Héctor Javier Santana García, Presidente Municipal del referido Ayuntamiento, mismos que fueron difundidos del tres al veintiocho de marzo, doce y treinta y uno de mayo del presente año, en los Municipios de Bahía de Banderas, Tepic, Santiago, Compostela, Xalisco y San Blas, del Estado de Nayarit, transmitidos en distintos horarios a lo largo de los días indicados y **en los cuales se hizo alusión al nombre de Héctor Javier Santana García**, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, **por lo que sin duda tuvieron la intención de posicionarlo como una opción política ante los ciudadanos del Estado de Nayarit, de cara a**

la elección al proceso local ordinario 2027 en el que se renovarán la totalidad de las autoridades del Estado de Nayarit. (Énfasis añadido).

Como se estableció en el marco jurídico, la Sala Superior estableció un test de tres elementos para determinar la existencia de la promoción personalizada, el cual se integra de la siguiente manera:

> En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes:
>
> **a) Personal.** Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan **plenamente identificable al servidor público**;
>
> **b) Objetivo.** Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para **determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada** susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y
>
> **c) Temporal.** Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, **en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo**. (Énfasis añadido).

En el caso, es **infundado** que no se acredita el elemento personal, luego que ello se actualiza con la alusión del nombre como lo señala la responsable.

Por su parte, son **esencialmente fundados** los agravios tendentes a demostrar que no se colman los elementos temporal y objetivo.

Del acto impugnado se obtiene que las conductas denunciadas se realizaron del 3 al 28 de marzo -spot de obras públicas-, y el 12 y 31 de mayo -spot del día de las madres-, de 2025[37]. En tal fecha no se encontraba en curso el proceso electoral ordinario.

Ahora bien, el proceso electoral ordinario 2027, que la responsable establece como referencia, inicia el siete de enero de esa anualidad de acuerdo al artículo 117, párrafo segundo, de la Ley Electoral, por lo que se advierte una diferencia aproximada de un año y nueve meses respecto del primer spot, y de un año y siete meses tocante al segundo spot, para el inicio del proceso que renovará la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos.

Bajo tales circunstancias, de conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior, no opera la presunción de que la propaganda tenga el propósito de incidir en la contienda.

Ahora, la responsable tiene por existente la falta con la circunstancia de que las conductas se sitúan antes del proceso electivo 2027, sin embargo, en esa eventualidad, debe realizarse un análisis de proximidad del debate con el inicio del proceso electoral, lo que no se realiza en el acto impugnado.

Además, la autoridad responsable tampoco justifica el elemento

37 Así se señala en el acto impugnado a hoja 10 diez. En el apartado de antecedentes del acto impugnado (hoja 2 dos) se advierte la siguiente cronología de actos de 2025: denuncia, 9 de junio; inicio del procedimiento, 26 de agosto; cierre de investigación, 21 de octubre; recepción de alegatos y turno para resolución, 18 de noviembre.

objetivo, esto es, no expone las razones de cómo los mensajes constituyen un ejercicio de promoción personalizada.

En ese sentido, como bien lo dice el actor, la sola mención del nombre no actualiza la falta, y por sí mismo no acredita el elemento objetivo o material, pues si así fuera, se tratara de un solo elemento -personal y objetivo- y no diversos como lo indica el test jurisprudencial.

Ahora bien, de dicho nombre la responsable infiere una finalidad electoral, lo cual, como dice el apelante, es una consideración indebida.

Lo anterior, porque no existe una referencia a proceso electoral alguno o a posibles candidaturas, lo que permite advertir que no se tiene una intención explícita de influir en la contienda electoral.

De esa manera, la ausencia de referencias a procesos electorales o a fuerzas políticas que pudieran contender en la elección son indicativos de que los hechos denunciados no comprometen los principios de neutralidad e imparcialidad.

Respecto del análisis de los elementos de la falta, sirven de apoyo las consideraciones de la sentencia SUP-PSC-29/2026 de la Sala Superior.

De otro lado, también asiste razón a la parte actora en que el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado, pues no se justifica porque se concluye la actualización del artículo 221, fracción III, de la Ley Electoral, luego que este solicita que las conductas tengan lugar durante los procesos electorales, y los

hechos del caso, tienen verificativo fuera de él -2025-[38].

Consecuentemente, queda demostrada la violación al artículo 16, párrafo primero, de la Constitución General, en tanto el acto impugnado está indebidamente fundado y motivado; y, al resultar esencialmente fundados los agravios sobre los elementos objetivo y temporal de la falta, los cuales se estiman suficientes para revocar de forma lisa y llana el acto impugnado porque no se reúnen los tres elementos de la promoción personalizada, deviene innecesario el estudio del resto de los motivos de inconformidad, en tanto no se beneficiaría en mayor medida al actor[39].

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en términos del artículo 72 de la Ley de Justicia Electoral, se

RESUELVE

UNICO. Se **revoca de forma lisa y llana** el acuerdo **IEEN-CLE-030/2026** por el que el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit resolvió el procedimiento ordinario sancionador **IEEN-DJ-POS-007/2025**

NOTIFÍQUESE, en términos de la normatividad aplicable,

---

38 Artículo 221.- Constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes del Estado y de los municipios, órganos autónomos locales, y cualquier otro ente público a la presente ley:
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos **durante los procesos electorales**; (Énfasis añadido)

39 Sirve de apoyo la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 175-180, cuarta parte, página 7, registro digital 240348, de rubro y texto siguiente: **CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS**. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja.

publíquese la presente resolución en la página de Internet de este Tribunal trieen.mx, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

La presente sentencia por engrose fue aprobado por **mayoría** de votos de la **Magistrada Presidenta** Candelaria Rentería González y la **Magistrada** Selma Gómez Castellón, al votar en contra del proyecto presentado por la **Magistrada** Martha Marín García, ello ante la **Secretaria General de Acuerdos**, Martha Verónica Rodríguez Hernández, quien certifica la votación obtenida en la sesión pública de resolución de fecha trece de octubre de dos mil veintiséis, da fe y autoriza.

Candelaria Rentería González
Magistrada Presidenta

Selma Gómez Castellón
Magistrada

Martha Marín García
Magistrada

Martha Verónica Rodríguez Hernández
Secretaria General de Acuerdos

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
NAYARIT

Expediente: TEE-AP-14/2026

EL PRESENTE PROYECTO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDE AL VOTO PARTICULAR QUE CONFORME AL ARTICULO 81 INCISO g) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL EMITE LA MAGISTRADA MARTHA MARIN GARCÍA.

Recurso de Apelación
Expediente: TEE-AP-14/2026.
Parte actora: Héctor Javier Santana García.
Autoridad responsable: Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit[1].
Magistrada ponente: Martha Marín García.
Secretaria de Estudio y Cuenta: Edny Guadalupe López López

Tepic, Nayarit, a doce de octubre de dos mil veintiséis[2].

Proyecto de Sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit[3], que **revoca** la resolución emitida dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador **IEEN-DJ-POS-007/2025** por el Consejo Local.

R E S U L T A N D O S

I. Antecedentes.

De conformidad con lo expresado en el escrito impugnativo, así como de las constancias que obran en autos, se advierten los

1 En adelante Consejo Local o autoridad responsable
2 Todas las fechas corresponden al año ***dos mil veinticinco***, salvo mención expresa.
3 En adelante, ***Tribunal*** u ***órgano jurisdiccional***.

ACTUACIONES

siguientes antecedentes:

1. **Denuncia.** El nueve de junio de dos mil veinticinco, el ciudadano Alexis Samir Villareal Vargas, presentó denuncia en contra de Héctor Javier Santana García en su carácter de Presidente Municipal de bahía de Banderas, Nayarit, así mismo, en contra del Representante Legal de Stereo Vida -Emisora del grupo Radiorama-, por la probable infracción a la Ley Electoral consistente en promoción personalizada.

2. **Recepción Reserva del inicio o desechamiento y se ordenan diligencias preliminares.** El veintisiete de junio, se tuvo por recibida la denuncia, se registró con el número de expediente IEEN-DJ-POS-007/2025, se reservó proveer sobre la admisión o desechamiento hasta que se contara con los elementos necesarios para la determinación y se ordenaron diligencias preliminares con la finalidad de certificar el contenido de los enlaces electrónico -URL- proporcionados por el denunciante.

3. **Inicio del Procedimiento Sancionador IEEN-DJ-POS-021/2025.** Mediante proveído de fecha veintiséis de agosto, se admitió el Procedimiento Ordinario Sancionador.

4. **Conclusión de etapa de investigación.** El veintiuno de octubre la encargada del despacho de la Dirección Jurídica, emitió acuerdo en el que se declaraba cerrada la etapa de investigación, aperturandose la etapa de alegatos.

5. **Resolución**. El nueve de marzo de dos mil

veintiséis, el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, resolvió del Procedimiento Ordinario Sancionador IEEN-DJ-POS-021/2025, declarando existente la infracción atribuida al Ciudadano Héctor Javier Santana García en su carácter de Presidente Municipal de bahía de Banderas, Nayarit, imponiéndosele una multa, así mismo se declaró inexistente la infracción atribuida a Yami Habib Ortiz, Representante Legal de XHPY-FM, S.A. de C.V. "Radio Stereo Vida".

6. Medio de impugnación. El dieciocho de marzo de dos mil veintiséis, se presentó en la Oficialía de partes del IEEN, Recurso de Apelación, en contra de la resolución pronunciada dentro del expediente IEEN-DJ-POS-007/2025, informándolo a este Órgano Jurisdiccional, con la misma fecha la encargada de despacho del mismo instituto mediante oficio IEEN/SG/0382/2026.

7. Sustanciación. Mediante acuerdo de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiséis, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional tiene por presentado el Recurso de Apelación, ordenando su registro con la clave TEE-AP-14/2026, el cual mediante acuerdo del día veintitrés de marzo, fue turnado a la ponencia de la Magistrada Martha Marín García.

8. *Radicación,* En acuerdo de fecha veinticinco de marzo, la Magistrada Instructora radicó en su ponencia el medio de impugnación TEE-AP-14/2026.

9. Admisión y cierre de instrucción. Mediante

ACTUACIONES

proveído de primero de octubre, se ordenó su admisión y, al no existir ninguna diligencia pendiente por realizar, declara cerrado el periodo de instrucción, ordenándose emitir la resolución que corresponda; lo que ahora se hace al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.

Este Tribunal es competente para conocer el presente asunto, de conformidad con los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4; 105, 106.3 y 111 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 135, apartado D, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 5, 8, 22, 68, fracción III, 70, 72 y demás relativos de Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit[5].

Lo anterior, al impugnarse la declaración de la existencia de la infracción a la Ley Electoral y la aplicación de sanciones administrativas[6].

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad del Recurso. En el caso, se cumplen con los requisitos de procedencia del Recurso de Apelación, previstos en los artículos 26, 27, 68 y 69 de la Ley de Justicia, en los términos siguientes:

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable, en ella consta: el nombre y la firma autógrafa de la promovente; los hechos materia de la impugnación; los agravios

4 En adelante, ***CPEUM*** o ***Constitución Federal***.
5 En adelante, ***Ley de Justicia Electoral***.
6 Con fundamento en el artículo 68, fracción III.

expresados por la recurrente y los preceptos legales presuntamente violados.

b) Oportunidad. Se satisface este requisito, atendiendo a que la resolución combatida fue aprobada, el nueve de marzo, notificándose al actor el once de marzo de dos mil veintiséis y el medio de impugnación se presentó el dieciocho de marzo de dos mil veintiséis, como se observa en la siguiente imagen:

Lunes 9 de marzo	Martes 10 de marzo	Miércoles 11 de marzo	Jueves 12 de marzo	Viernes 13 de marzo	Sábado 14 de marzo	Domingo 15 de marzo	Lunes 16 de marzo	Martes 17 de marzo	Miércoles 18 de marzo
Resolución impugnada		notificación	**Dia uno**	**Dia dos**	**inhábil**	**inhábil**	**inhábil**	**Dia tres**	**Dia cuatro Presentación de la demanda**

De ahí que resulta inconcuso que el presente recurso se presentó dentro de los cuatro días que establece el artículo 26 de la Ley de Justicia Electoral.

c) Legitimación e interés jurídico. Se satisface este requisito, toda vez que se trata de la persona a quien se le atribuye la infracción en su carácter de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, así mismo es a quien se le impone la multa por la infracción atribuida, dentro del expediente **IEEN-DJ-POS-007/2025,** dentro de un procedimiento ordinario sancionador en el que ostenta la calidad de denunciado, misma que, además, le es reconocida por la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

d) Definitividad. Este requisito de procedibilidad se satisface, en atención a que el acto reclamado no admite medio de defensa

ACTUALIS

alguno que deba de ser agotado previamente al medio de impugnación que se resuelve.

TERCERO. Tercero interesado. Durante el periodo de publicación que ordena el artículo 39, fracción II, de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, compareció a deducir derechos en calidad de tercero interesado el **C. Alexis Samir Villareal Vargas.**

Del análisis del escrito en comento, se colige que el mismo satisface los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, en los términos siguientes:

Forma. Su solicitud se presentó por escrito, en la que consta su nombre y firma autógrafa, y expresa las razones en que funda sus intereses.

Legitimación. El promovente comparece en su carácter de denunciante en el expediente IEEN-DJ-POS-07/2025.

Interés jurídico. La promovente cuenta con un derecho incompatible al de la actora, quien pretende controvertir del consejo Local, la resolución de fecha nueve de marzo de dos mil veintiséis, emitida dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador IEEN-DJ-POS-007/2025, en la que él es parte denunciante.

Oportunidad. El promovente compareció dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicitación del medio de impugnación, tal y como se advierte en el acuse de recibido en oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable.

En consecuencia, se reconoce el carácter de tercero interesado a **Alexis Samir Villareal Vargas.**

CUARTO. Causales de Improcedencia. La autoridad responsable no invocó ninguna causal de improcedencia y este Tribunal no advierte de oficio la actualización de alguna otra, por lo que procede analizar de fondo el presente medio de impugnación.

QUINTO. Síntesis de agravios. Del análisis integral del escrito de demanda se desprende que la parte apelante hace valer, esencialmente, como motivo de reproche, lo siguientes agravios:

1. Incorrecta valoración del contenido de los spots relativos a la difusión en radio de obras públicas del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, así como del día de las madres.
2. Indebida valoración del contexto de difusión en radio.
3. Omisión por parte de la autoridad responsable, de analizar el contexto temporal de la difusión. Ante la ausencia del proceso electoral.
4. Violación al principio de tipicidad e incorrecta interpretación del artículo 134 Constitucional y falta de motivación.
5. Indebida valoración de pruebas y violación al principio de presunción de inocencia, ante la falta de acreditación del elemento objetivo y personal.
6. Violación a los principios de legalidad, seguridad jurídica, tipicidad y debida fundamentación y motivación.
7. Violación al debido proceso.
8. Violación al principio de exhaustividad.
9. Violación al principio de legalidad en la calificación e imposición de la sanción, al carecer la autoridad administrativa de facultades para imponer sanciones a servidores públicos.

Por ello, considera que tales deficiencias vulneran en su

ACTUACIONES

perjuicio lo dispuesto por los artículos 1°, 14, 16, 41, 133, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los artículos 1, 2, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

SEXTO. Pretensión y precisión de la litis.

Con base en los agravios anteriores, la pretensión del actor es que se revoque la resolución del nueve de marzo, emitida dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador número IEEN-DJ/POS/007/2026.

La causa de pedir consiste en que el actor hace valer que la autoridad responsable al emitir la resolución impugnada, lo declara administrativamente responsable de difusión de propaganda institucional con promoción personalizada del servidor público, difundiendo su imagen, nombre y cargo que ostenta a través de la radio y redes sociales, sin medios de prueba suficientes para acreditar la infracción, lo que viola los principios de legalidad, exhaustividad, debido proceso, seguridad jurídica, tipicidad, presunción de inocencia, fundamentación y motivación.

La litis en el presente juicio, radica en determinar si la decisión controvertida se ajustó a los principios de legalidad, exhaustividad, debido proceso, seguridad jurídica, tipicidad, presunción de inocencia, fundamentación y motivación.

SÉPTIMO. Pruebas y su valor jurídico.

Por cuanto a las **pruebas documentales** que les fueron admitidas a las partes, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto ofrecidas por la parte actora, las

cuales fueron desahogadas por este órgano jurisdiccional, tal y como consta en el acuerdo de fecha primero de octubre de dos mil veintiséis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 y 38 de la Ley de Justicia, se concede valor probatorio pleno a las documentales públicas y a la Instrumental de actuaciones, dada su propia naturaleza, puesto que solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano jurisdiccional junto con los demás elementos que obran en el expediente, y las afirmaciones de las partes, generan convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados con estas pruebas.

En cuanto a la **presuncional en su doble aspecto, legal y humana,** se deducirá del ejercicio intelectivo que lleva a cabo este órgano jurisdiccional en la presente resolución.

Lo anterior con independencia de su eficacia probatoria o demostrativa, esto es, de la efectividad o éxito que tengan para acreditar la pretensión del oferente[7].

OCTAVO. Metodología.

Para una mejor comprensión y resolución del presente asunto, los agravios expresados por la recurrente se analizarán de manera conjuntan los relativos a la infracción atribuible al denunciado y por separado los relativos a la sanción impuesta.

Tal metodología no implica afectación alguna a sus derechos procesales, en tanto se garantiza un estudio integral de todos los planteamientos formulados. Lo anterior encuentra sustento en la

7 Es orientadora la tesis III.2o.C.47 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, agosto de 2020, Tomo VI, página 6215, de rubro: **PRUEBAS. SU VALOR SE VINCULA CON EL MEDIO DE CONVICCIÓN EN SÍ MISMO EN CUANTO A SU CAPACIDAD DE PROBAR, PERO ELLO NO DETERMINA LA EFICACIA DEMOSTRATIVA PARA ACREDITAR LO PRETENDIDO POR EL OFERENTE.**

ACTUACIONES

Jurisprudencia **04/2000**, emitida por la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[8]—[9].

NOVENO. Estudio de fondo y decisión de este Tribunal.

1. Decisión.

A juicio de este Tribunal, debe revocarse la resolución emitida dentro del expediente IEEN-DJ-POS-007/2026, al sancionarse de manera errónea la infracción acreditada consistente en promoción personalizada y su difusión fuera de la cobertura geográfica regional correspondiente a su ámbito de responsabilidad.

A continuación, se desarrollan el marco normativo y las razones en las que se sustenta esta decisión.

2. Marco jurídico.

- ***Principios de legalidad, fundamentación, motivación, exhaustividad y congruencia.***

Debe decirse que, con la emisión de un acto de autoridad, ya sea administrativo o jurisdiccional, debe tenerse en cuenta el principio de legalidad, consistente en que las autoridades sólo pueden actuar cuando la ley se los permita, en la forma y términos que la misma prevé. Lo que está íntimamente vinculado con el deber de fundamentar y motivar todo acto de autoridad, en virtud de lo ordenado en la Constitución Federal en sus artículos 14 y 16.

Es de señalar que la Sala Superior del TEPJF, reiteradamente

---

8 En adelante, ***Sala Superior del TEPJF.***
9 Jurisprudencia. Clave anterior: S3ELJ 04/2000, 3a Época, Localización: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. De rubro: **AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.**

ha sostenido que la fundamentación consiste en que la autoridad emisora del acto exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso en concreto, mientras que la motivación implica el deber de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión, siendo necesario, para que ésta sea correcta, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que en cada caso en concreto se configuren las hipótesis normativas.

De manera que, para estimar que un acto de autoridad se encuentra debidamente fundado y motivado, no basta con que la autoridad cite los preceptos que estima aplicables, sino que debe expresar las razones por las que considera que los hechos que imperan se ajustan a la hipótesis normativa, pues de lo contrario, el gobernado desconocerá los motivos que impulsan a una autoridad para actuar de una manera y no de otra, viéndose disminuida así la certeza jurídica que, por mandato constitucional, le asiste[10].

Por tanto, existe falta de fundamentación y motivación cuando en la sentencia no se den razones, motivos ni fundamentos, que justifiquen la decisión.

Por otro lado, una resolución estará indebidamente fundada y motivada cuando la autoridad emisora del acto invoque preceptos que no resulten aplicables al caso concreto o mencione razones que no se ajusten a la controversia planteada.

Asimismo, los principios de *fundamentación* y *motivación*

10 Con sustento en la jurisprudencia 5/2002 de rubro: **"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SIMILARES)"**. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 36 y 37; así como en https://www.te.gob.mx/ius2021/#/.

ACTUACIONES

guardan una estrecha vinculación con el principio de completitud del que a su vez derivan los de *congruencia* y *exhaustividad*, pues la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad descansa en el análisis exhaustivo de las cuestiones que se sometieran a su potestad.

En relación con lo anterior, las resoluciones jurisdiccionales deben dictarse de forma completa o integral, tal como lo ordena la CPEUM, en el artículo 17, supuesto del cual deriva el principio de exhaustividad.

Dicho principio impone a la autoridad el deber de agotar en la resolución, todos y cada uno de los planteamientos hechos valer por las partes durante la integración del problema jurídico planteado, en apoyo de sus pretensiones[11].

El anterior principio está vinculado al de congruencia, pues las sentencias, además, deben ser consistentes consigo mismas, con el problema a resolver y con la demanda, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no aludidas, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga a pronunciarse de todas y cada una de las pretensiones[12].

- ***Derecho de acceso a la justicia.***

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera

---

11 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 12/2001 emitida por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: **"EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE"**. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17; así como en https://www.te.gob.mx/ius2021/#/.

12 Tesis 1a./J. 33/2005, 1ª, SCJN, de rubro **"CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS."** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pág. 108.

pronta, completa e imparcial; conforme lo establece el artículo 17 de la CPEUM.

Es por ello, que el Estado mexicano se encuentra comprometido a garantizar que la autoridad competente, prevista por el sistema legal, decida sobre los derechos de toda persona que interponga un recurso; a desarrollar las posibilidades del recurso judicial y a garantizar su cumplimiento, por las autoridades responsables, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, no sólo está obligado a establecer órganos jurisdiccionales para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, sino que dicho deber implica una exigencia permanente de que ésta se materialice mediante recursos sencillos y rápidos, que se traduzcan en una impartición de justicia pronta, completa e imparcial.

El derecho a un recurso efectivo no implica que todos los medios de impugnación deban ser admitidos y resueltos con análisis de fondo, sino que es válido que se establezcan requisitos de admisibilidad (procedencia) siempre que constituyan limitantes legítimas y, a su vez, que los recursos sean confinados a determinadas materias.

- **El derecho administrativo sancionador.** La facultad inherente del Estado de contener y sancionar conductas ilícitas -en atención a su finalidad de lograr el bienestar común- se conoce como "Ius Puniendi", y dicha potestad sancionadora se aplica ordinariamente en el ámbito del derecho penal.

En ese sentido, los principios contenidos y desarrollados por el

ACTUACIONES

derecho penal le son aplicables al derecho administrativo sancionador electoral. Para lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas que vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el bien común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el estado de derecho.

Ahora, de acuerdo con los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer el comportamiento sancionable, se han establecido dos regímenes distintos: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador.

La división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tiene su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor trascendencia del individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se tutelan los intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bienestar común y la paz social. Por ello, es

válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi.

Lo anterior no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas.

Ello tampoco significa que todos los principios penales son aplicables a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa distinción de su regulación normativa[13].

Se considera de primordial importancia, dejar establecido que, para la sustanciación, análisis y resolución de los diversos juicios y procedimientos relativos al régimen sancionador electoral, en tanto que entrañan la potestad del Estado de castigar una infracción o ius puniendi, se deben atender en su

13 Véase la Tesis XLV/2002, de rubro "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS DERECHOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL", consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, Año 2003, páginas 121 y 122.

integridad ciertos principios del derecho penal, a saber:

a) Reserva legal (lo que no está prohibido, está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción;
b) El supuesto normativo y la sanción deben estar legislativamente en forma previa a la comisión del hecho;
c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y,
d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos, determinados
d) Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio orientador, la Jurisprudencia 7/2005 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , del rubro "RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES".

- **Propaganda gubernamental**

Se tiene que el artículo 41, Base III, Apartado C, de la Constitución federal, dispone expresamente que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público.

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

En ese sentido, en diversos precedentes como la resolución correspondiente al SUP-REC-139/2019 y sus acumulados, Sala Superior ha concluido que, en el artículo 41 constitucional se dispuso una prohibición temporal a los gobernantes y gobiernos durante el tiempo que comprenden las campañas electorales y hasta la fecha de la jornada electoral, a la difusión de propaganda gubernamental.

Por su parte, el párrafo octavo del artículo 134 del texto constitucional prevé, que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda

ACTUACIONES

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona del servicio público.

Es decir, a diferencia de las prohibiciones previstas en el artículo 41 constitucional que son de carácter temporal, en la medida en que se prohíbe la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la fecha de la jornada electoral, mientras que; las restricciones dispuestas por el diverso 134 de la Constitución federal tienen un carácter permanente, es decir antes, durante y después de los procesos electorales.

En este sentido, si bien, el texto fundamental no dispone de una definición del término de propaganda gubernamental, Sala Superior ha delineado una sólida línea jurisprudencial en la que ha sostenido que, la propaganda gubernamental forma parte de la publicidad oficial, relacionada con información relativa a servicios o políticas públicas, cuya finalidad dual la constituye, por un lado, garantizar el derecho a la información de la ciudadanía por tratarse de cuestiones públicas y el ejercicio de los derechos de los beneficiarios de las mismas y, por otro, hacer del conocimiento de la población determinadas acciones de política pública con la finalidad de procurar la adhesión, o apoyo de los gobernados hacia el ente de gobierno.

En consonancia con las disposiciones constitucionales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha dispuesto directrices por cuanto a la permisividad constitucional que la propaganda gubernamental, lo mismo que la información pública o gubernamental, consistentes en lo siguiente:

Contenido. No debe estar dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, a favor o en contra de partidos políticos o de candidaturas a cargos de elección popular.

Temporalidad. No puede difundirse durante los periodos que comprenden las etapas de campaña electoral, periodo de reflexión, conformado por los tres días previos al de la elección, y hasta el final de la jornada electoral.

Intencionalidad. Por regla general, debe tener carácter institucional y no estar personalizada.

En todo caso, al tratarse de información pública, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la información gubernamental (incluida la propaganda) es una modalidad de comunicación oficial que implica información de interés público y debe tener por objeto satisfacer los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para violar los derechos humanos de la ciudadanía, o con fines electorales o partidarios.

Así mismo la Legislación Local en el articulo 143 fracción VII, de la Ley Electoral define la Propaganda gubernamental, a aquella de carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social que bajo cualquier modalidad de comunicación social difunden los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, con motivo de sus funciones;

- **Principios de imparcialidad y neutralidad a cargo de las personas servidoras públicas.**

La Constitución Federal establece que las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

ACTUACIONES

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos[14].

Al respecto, Sala Superior[15] ha establecido que esa norma tutela dos bienes jurídicos en el sistema democrático: a) la imparcialidad y la neutralidad con que deben actuar las personas servidoras públicas y b) la equidad en los procesos electorales.

El propósito es claro en cuanto dispone que las y los servidores públicos deben actuar con suma cautela, cuidado y responsabilidad en el uso de recursos públicos (económicos, materiales y humanos), que se les entregan y disponen en el ejercicio de su encargo, es decir, que destinen los recursos para el fin propio del servicio público correspondiente.

Esta obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial, atinente a que no haya una influencia indebida por parte de las personas servidoras públicas en la competencia que exista entre los partidos políticos y candidaturas.

Al respecto, si bien el aludido precepto constitucional hace referencia a que los recursos públicos sean utilizados sin influir en la contienda electoral, también es posible desprender la exigencia que se dé una actuación imparcial de las personas servidoras públicas, con el objeto de que ningún partido, candidatura o coalición obtenga algún beneficio que pueda afectar el equilibrio que debe imperar en una contienda electoral.

En ese sentido, Sala Superior ha establecido que la vulneración a la equidad e imparcialidad en la contienda electoral está sujeta a la

14 artículo 134, párrafo octavo, "Artículo 134. [...] Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos."
15 SUP-REP-319/2022 y acumulados.

actualización de un supuesto objetivo necesario, relativo a que el proceder de las personas servidoras públicas influya en la voluntad de la ciudadanía[16].

La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público se fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que personas funcionarias públicas utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo de su encargo, para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea a favor o en contra de determinado partido político, aspirante o candidatura. Sobre esa misma línea de interpretación, Sala Superior[17] ha señalado que el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal implica una exigencia general de imparcialidad en el actuar de las personas servidoras públicas en el marco del ejercicio de sus funciones, con el objeto de que ningún partido, candidatura o coalición obtenga algún beneficio que pueda afectar el equilibrio que debe imperar en una contienda electoral.

Con lo cual no se pretende limitar, en detrimento de la función pública, las actividades encomendadas a los servidores públicos, tampoco impedir que participen en actos inherentes a sus encargos[18].

Más bien, se exige que con su actuar público no incidan en la libre y equitativa competencia que debe imperar en los procesos electorales, lo que, a su vez, implica un deber de cuidado y autocontención particularmente reforzado ante aquellas declaraciones o actuaciones que pudieran influir en la opinión del electorado.

ACTUACIONES

16 SUP-REP-163/2018.
17 SUP-JE-1107/2023.
18 Ver la jurisprudencia 38/2013 de la Sala Superior, de rubro SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.

En ese sentido, los elementos que deben ser analizados por las autoridades electorales para determinar el grado de afectación o incidencia en un proceso electoral derivado de las conductas desplegadas por personas del servicio público, son los siguientes[19]:

1. Cargo de la persona servidora pública, poder público de adscripción, nivel de gobierno y disposición de recursos públicos.

2. Funciones que ejerce, influencia y grado de representatividad en la entidad federativa.

3. Vínculo con un partido político u opción electoral, entre otros elementos que permitan generar inferencias válidas de un posible desempeño indebido de la función pública.

- **Uso indebido de recursos públicos.**

En cuanto a esta infracción, Sala Superior ha sostenido que, para considerar acreditada una vulneración al artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución, debe demostrarse de manera plena que la persona servidora pública denunciada utilizó de forma indebida los recursos públicos bajo su responsabilidad con el propósito de influir en la contienda electoral o en la voluntad del electorado, favoreciendo a un partido político o candidatura específica.

En consecuencia, el objetivo de dicha disposición constitucional es impedir que las y los servidores públicos empleen el cargo que desempeñan o los recursos públicos a su disposición para fines ajenos a los establecidos por la autoridad competente, especialmente aquellos que busquen influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, afectando con ello el principio de equidad en las campañas y en los resultados electorales. En suma,

19 Acorde con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso SUP-REP-240/2023 y acumulados.

esta infracción se acredita cuando se utilicen recursos públicos con fines distintos a los que se deben destinar.

3. Justificación.

En ese sentido, se advierte que en la resolución impugnada se determino que el Ciudadano Héctor Javier Santana García incumplió con la preservación del principio de imparcialidad, esto es el de aplicar los recursos públicos que tiene bajo su responsabilidad al realizar promoción personalizada en su favor con el objeto de posicionarlo entre la ciudadanía de Nayarit de cara al Proceso Local Ordinario dos mil veintisiete, en el cual, para el estado de Nayarit, se renovaran todas las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Ante esta instancia acude el Ciudadano Héctor Javier Santana García con la pretensión de que la sentencia local se revoque porque, desde su perspectiva, viola los principios de tipicidad, presunción de inocencia, de legalidad, seguridad jurídica, tipicidad y debida fundamentación y motivación, al debido proceso, al principio de exhaustividad y de legalidad, bajo los siguientes argumentos:

1. Incorrecta valoración del contenido de los spots relativos a la difusión en radio de obras públicas del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, así como del día de las madres.

   Referente al spot donde se da a conocer una vía alterna, se trata de propaganda gubernamental meramente informativa y en el otro se trata de un mensaje de carácter social y conmemorativo dirigido a reconocer a las madres con motivo de una fecha conmemorativa.

2. Indebida valoración del contexto de difusión en radio.
3. Omisión por parte de la autoridad responsable, de analizar

el contexto temporal de la difusión. Ante la ausencia del proceso electoral.

4. La resolución que se combate, se aparto de la literalidad de la ley, ya que pretende sancionar una conducta que no se encuentra prevista como infracción en la legislación electoral local.
5. incorrecta interpretación del artículo 134 Constitucional y falta de motivación.
6. Indebida valoración de pruebas, ante la falta de acreditación del elemento objetivo y personal, así como la omisión de exponer de manera fundada y motivada las pruebas que le sirvieron de asidero para tener por acreditada la descripción típica que se le atribuye.
7. Del fundamento legal que se establece como conducta antijurídica que se incurre, es requisito indispensable que esa conducta se lleve acabo durante los procesos electorales, lo que no acontece en el caso hipotético que nos atañe.
8. La autoridad responsable incorporo como prueba la fe de hechos practicada en la data treinta de junio de dos mil veinticinco, sin que se le notificara la fecha en la que se practicaría para poder asistir a su practica y poder ejercer su derecho de defensa.
9. No se atendieron las diversas manifestaciones que se realizaron en la contestación a la denuncia, en la cual se expusieron diversos argumentos tendentes a acreditar que no se acreditaba la existencia de la hipótesis normativa que se le imputaba.
10. Se le declara responsable de la falta administrativa que le fue imputada, sin que existieran, pruebas de cargo aptas y suficientes vulnerando el derecho humano de presunción

de inocencia.

11. Violación al principio de legalidad en la calificación e imposición de la sanción, al carecer la autoridad administrativa de facultades para imponer sanciones a servidores públicos.
12. No se razonó porque la conducta típica que se le atribuye generaba automáticamente la imposición de la multa por el máximo permitido por la ley.

Como se señaló con antelación, el párrafo octavo del artículo 134 del texto constitucional prevé, que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, **deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona del servicio público.**

1. Agravios relativos a la infracción atribuida al denunciado.

En cuanto a los Spots relativos a la difusión en radio de obras públicas y del día de las madres, resultan unos infundados y otros inoperantes.

Como consta en el acuerdo recaído en el expediente IEEN-DJ-POS-007/2026 con fecha veintisiete de junio, con el objeto de evitar que se pierdan o se alteren los hechos denunciados y que la autoridad se allegue de elementos necesarios para la debida integración del expediente, con fundamento en los artículos 234 fracción IV de la

Ley Electoral, 19 y 21 del Reglamento de Quejas, se ordena como diligencias preliminares la certificación del contenido de la memoria USB, respecto de los archivos en formato de audio que pudiese encontrar, la cual se realizó el día treinta de junio de dos mil veinticinco, en términos de lo establecido en el articulo 88 fracción XVII de la Ley Electoral, en relación con los numerales 2, 3 inciso d), 10, 11, 12, y 20 del Reglamento para el Funcionamiento de Oficialía Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit[20].

En esos términos resulta infundado el agravio porque, contrario a lo aseverado por el recurrente no existía la obligación de ser notificado de la fecha en la que se practicaría para poder asistir a su práctica y poder ejercer su derecho de defensa ya que como se estableció se realizo en cumplimiento a las diligencias preliminares, y estar en condiciones de hacerse de elementos para determinar la admisión de la denuncia interpuesta en su contra, y que su derecho de defensa lo ejerció en su comparecencia a deducir sus derechos mediante la contestación a la denuncia en la que podía ofrecer sus medios de convicción los cuales se limito a ofrecer como pruebas la Presuncional y la Instrumental de Actuaciones, para desvirtuar la infracción atribuida.

Referente a la valoración de las pruebas, estas se realizaron en términos de lo dispuesto en la Legislación aplicable, concediéndoles valor probatorio pleno e indiciario, las cuales como bien lo establece la autoridad responsable, en el acuerdo impugnado, del análisis de los medios de prueba, concatenados y adminiculados entre sí, se tiene por acreditado, que el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, contrató con la persona moral YHPY-FM S. A. de FM., tiempo de radio para que por medio de la estación 93.3 de FM., se

20 En adelante IEEN

difundieran dos "spots", el primero alusivo al día de las madres y el segundo si bien lo hace en relación a unas obras en el mismo se destaca el liderazgo del Ciudadano Héctor Javier Santana García, Presidente Municipal del referido Ayuntamiento, mismos que fueron difundidos del tres al veintiocho de marzo, doce y treinta y uno de mayo del presente año, **en los Municipios de Bahía de Banderas, Tepic, Santiago, Compostela, Xalisco y San Blas**, del Estado de Nayarit, transmitidos en distintos horarios a lo largo de los días indicados y en los cuales se hizo alusión al nombre de **Héctor Javier Santana García**, en su carácter **de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit**, por lo que sin duda tuvieron la intención de posicionarlo como una opción ante política ante los ciudadanos del Estado de Nayarit, de cara a la elección al proceso local ordinario 2027 en el que se renovarán la totalidad de las autoridades del Estado de Nayarit.

Sin embargo, el recurrente no realiza argumentos lógicos- jurídicos que lo lleven a concluir una indebida valoración de las pruebas, de ahí la inoperancia de los agravios.

Debe precisarse que los motivos de inconformidad, si bien no tienen que construirse de manera forzosa como un silogismo, lo cierto es que deben estar encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta para resolver como lo hizo; en ese sentido los agravios deben contener argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuanta al resolver.

En ese sentido el agravio hecho valer por el accionante devienen de INOPERANTES ya que además de no señalar de manera clara la

violación que pudiera ocasionarles la indebida valoración de las pruebas tampoco esgrime los argumentos o razones elementales por las cuales se considera que la responsable debió obrar de una u otra manera.

Al respecto la SCJN ha establecido en las tesis jurisprudenciales de rubro **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO**[21] **y AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN**[22]**.**

Por otra parte, el párrafo octavo del artículo 134 del texto constitucional prevé, que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los entes de los tres órdenes de gobierno, como lo es el Ayuntamiento, deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona del servicio público.

Por su parte, el artículo 242, numeral 5, de la Ley General dispone que, para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a

---

21 **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO.** Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo.

22 **AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN.** No puede considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado.

conocer se difundan en los medios de comunicación social, **no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.** En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

Precisado lo anterior, se entiende que, si la propaganda gubernamental siempre debe tener carácter institucional y los recursos públicos deben asignarse con imparcialidad, entonces se proscribe su empleo para promocionar el nombre, imagen o voz de una persona del servicio público, en aprovechamiento de la posición en la que se encuentra para generar un beneficio de carácter electoral para sí misma o para una tercera persona[23].

Para identificar si los hechos pueden constituir propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada la Sala Superior ha sostenido que debe atenderse a los siguientes criterios[24]:

- **Elemento personal.** Se colma cuando se advierten voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la persona servidora pública.
- **Elemento temporal.** Establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral; aunque este no es el único periodo en que pueda actualizarse la infracción.
- **Elemento objetivo o material.** Impone el análisis del

23 Ver SUP-REP-624/2024, SUP-REP-416/2022 y SUP-PSC-2/2026.
24 Jurisprudencia **12/2015**, de rubro **PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA**. *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29.*

ACTUACIONES

contenido del mensaje, a través del medio de comunicación social de que se trate, para establecer si de manera efectiva e indubitable revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente.

Al respecto, se ha considerado que, si la conducta se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas.

Por su parte, **si se suscitara fuera del proceso, será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate propio de los comicios, para determinar adecuadamente si la propaganda incide en la equidad de la contienda.**

Para el caso que nos ocupa el recurrente refiere que el spot relativo a la difusión de obras publicas del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, se trata de propaganda gubernamental de carácter meramente informativo y el otro se trata de un mensaje de carácter social y conmemorativo dirigido a reconocer a las madres con motivo de una fecha significativa.

De lo anterior se acredita que las actividades difundidas, no corresponden al informe anual de labores o gestión de los servidores públicos.

Bajo ese contexto, dicho ejercicio de rendición de cuentas está sujeto a lo señalado por el artículo 14 de la Ley General de Comunicación Social, el cual establece que para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores, así como los mensajes que para darlos a

conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda ilícita, siempre que:

- Su difusión ocurra una vez al año.
- En medios con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad de la persona servidora pública.
- No exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.
- No se realice dentro del periodo de campaña electoral y;
- En ningún caso la difusión de tales informes tenga fines electorales.

En ese sentido, en las Acciones de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, resueltas el nueve de septiembre de dos mil catorce, la Suprema Corte enfatiza que el artículo 242, párrafo 5, de la Ley Electoral, no consignaba alguna excepción permisiva para desequilibrar la competencia partidista o para que, so pretexto de algún informe gubernamental de labores, se asociara a los promocionales respectivos la personalidad de quien lo rindiera.

De esta manera, la Suprema Corte puntualizó que ni siquiera con motivo del informe anual de labores o de gestión de las personas servidoras públicas, ni con motivo de los mensajes para darlos a conocer, puede eludirse la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, ni la de incluir en esa propaganda nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidor pública, pues en consonancia con el contexto de los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional, se deducía que la rendición anual de informes también está vinculada a la observancia de las mismas limitaciones que permanentemente tiene toda la

RESOLUCIÓN

propaganda gubernamental.

De ahí que sirve como criterio orientador que para la Suprema Corte, de la lectura armónica del texto completo del artículo 242, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que lejos de reducir las prohibiciones contenidas en el artículo 134 constitucional, lo que hace es establecer condiciones adicionales en orden a fijar con precisión la frecuencia, los plazos, el ámbito territorial y la oportunidad, dentro de las cuales puedan difundirse promocionales relacionados con los informes de gobierno de las autoridades estatales, municipales o de cualquier otro tipo.

Promoción personalizada.

La Ley General de Comunicación Social norma reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional, en sus artículos 5, inciso f)[25], y 9, fracción I[26], recoge la prohibición de la promoción personalizada y exalta como principios rectores la objetividad y la imparcialidad, a los que asigna la finalidad de tutelar la equidad en la contienda electoral.

Así, para efectos de analizar la probable promoción personalizada en el servicio público, es necesario que nos encontremos ante la figura de propaganda gubernamental, la cual ha sido definida por la Sala Superior, como la difundida, publicada o suscrita por cualquiera de los poderes federales o estatales, como de los municipios, órganos de gobierno de la Ciudad de México, o cualquier otro ente público cuyo contenido esté relacionado con informes, logros de

25 "Artículo 5. En el ejercicio del gasto público en materia de Comunicación Social, los Entes Públicos deberán observar con los siguientes principios rectores: (...) f) La objetividad e imparcialidad, que implica que la Comunicación Social en los procesos electorales no debe estar dirigida a influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos; (...)"

26 "Artículo 9.- Además de lo previsto en el artículo 21 de esta Ley, no se podrán difundir Campañas de Comunicación Social, cuyos contenidos: I. Tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, con excepción de lo previsto en el artículo 14

gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos.

Es decir, la definición en cita atiende al contenido de la propaganda y no a los factores externos por los que la misma se generó.

Ahora bien, la Sala Superior ha determinado en diversas resoluciones, que promoción personalizada es un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido y alcance se establece por el operador jurídico a partir del análisis de los casos específicos[27].

Por lo anterior, se debe acudir a diversas fuentes de Derecho, con el propósito de contar con un marco jurídico y conceptual, conforme al cual, se examinen los asuntos atendiendo a sus especificidades y contexto, especialmente el contenido discursivo o finalidad de la propaganda en cuestión.

La primera fuente, la encontramos en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional, en la que se incorporó dicho concepto jurídico en el texto del artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la iniciativa de la reforma constitucional de trece de noviembre de dos mil siete, se menciona que la finalidad de la inclusión de los párrafos séptimo y octavo del artículo 134, de la Constitución, es impedir que actores ajenos incidan en los procesos electorales, así como elevar a rango constitucional las regulaciones en materia de propaganda gubernamental tanto en periodo electoral como en tiempo no electoral; y poner fin a la indebida práctica de que servidores públicos utilicen la propaganda oficial, cualquiera que sea

27 De acuerdo con el criterio sostenido por la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-RAP-43/2009 y SUP-RAP-96/2009

el medio para su difusión, pagada con recursos públicos o utilizando los tiempos de que el Estado dispone en radio y televisión, para la promoción personal.

Asimismo, respecto al concepto de promoción personalizada, tenemos como fuente las jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual es resultado del ejercicio jurisdiccional que ha llevado a cabo al resolver asuntos con problemática jurídica similar.

Por lo que, a partir de la revisión de la citada exposición de motivos, ha razonado que una de las finalidades del párrafo octavo, del artículo 134, Constitucional, es impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso de este poder para promover ambiciones personales de índole política[28].

Ahora bien, frente a la indeterminación del concepto jurídico de promoción personalizada, la Sala Superior ha realizado el trabajo jurisdiccional de establecer elementos o directrices que orienten a los operadores jurídicos, para calificar los supuestos en los que sí se actualice dicha promoción; con tal propósito, se emitió la multicitada Jurisprudencia **12/201528 de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA."**

Conforme a la Jurisprudencia antes citada, a fin de dilucidar si se actualiza o no la infracción al artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución federal, y evitar que se influya en la equidad de la contienda electoral, se deben considerar los siguientes elementos:

---

28 Lo anterior, de acuerdo con el criterio sostenido por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-JDC903/2015

- **Elemento personal.** Se colma cuando en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público de que se trate.
- **Elemento objetivo.** Impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva, revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente. Con independencia de que la aparición de la imagen de un servidor público puede generar infracciones o responsabilidades en otras materias como puede ser la administrativa, civil, política o de comunicación social.
- **Elemento temporal.** Se acredita cuando el mensaje se efectuó iniciado el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si ocurrió dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, sin que dicho periodo pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, de lo contrario, será necesario realizar un análisis de proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda realizada pudiera influir en el mismo. Este elemento es útil para definir primero, si se está en presencia de una eventual infracción a lo dispuesto por el artículo 134, de la Constitución Federal, y a su vez, para decidir el órgano que sea competente para el estudio de la infracción atinente.

Por lo anterior, conforme a la línea jurisprudencial de la Sala Superior, para que se configure la infracción en materia electoral, se requiere de la actualización de los tres elementos: personal, temporal y objetivo; es decir, no bastaría la acreditación parcial.

La Sala Superior, a través de la Jurisprudencia 12/2015, determinó, que para efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, deben atenderse los siguientes elementos: **a) Personal, b) Objetivo y Temporal,** lo cual se realiza a continuación:

a) Elemento personal

En cuanto, al elemento Personal se tiene actualizado, toda vez que de las constancias que obra en el expediente, principalmente del acta circunstanciada de fe de hechos, que se realiza con la verificación de una memoria de almacenamiento U.S.B. (Universal Serial Bus) de fecha treinta de junio, la cual admiculada con la respuesta del requerimiento de información del representante legal **XHPY-FM, S.A. DE C.V. concesionaria de la estación de radiodifusión sonora con distintivo de llamada XHPY-FM, en la población de Tepic, Nayarit ("la estación"),** recibida en el IEEN el día ocho de julio en la que **afirma que, se celebró un contrato con el Ayuntamiento de Bahía de Banderas para la difusión de los dos "spots" que se adjuntaron al oficio de solicitud de información, contenidos en la memoria "USB" que adjuntaron.**

Por lo que los mensajes aludidos corresponden al Presidente Municipal de Bahía de banderas, destacando su persona, al referirse en el relativo al día de las madres textualmente refiere:

> ***"Habla el Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana.***
>
> *A todas las madres hoy en su día quiero darles las gracias por ser el corazón de cada hogar, por su amor incondicional, por su fuerza diaria por enseñarnos a luchar y a no rendirnos nunca, como hijo, como esposo y como papa de tres hijas, se bien que una madre cambia el mundo desde su casa, hoy les digo, cuentan conmigo siempre y con respeto y*

con todo el cariño, les deseo feliz día de las madres, ***su amigo Héctor Santana****"*

Y el relativo a "obras avanza" textualmente establece:

"Voz de Hombre: Bahía de Banderas las obras avanzan, bajo el liderazgo del Alcalde Héctor Santana ya está en funcionamiento una nueva vía alterna que conecta Altavela Paraiso Vallarta y Citadela con Tondoroque, agilizando la movilidad y descongestionando la carretera San Vicente - Mezcales, además, la calle veinte de noviembre en San Juan de Abajo ha sido rehabilitada y entregada, mejorando la circulación y la calidad de vida de los habitantes, en Higuera Blanca ya se cuenta con una nueva red de agua potable y en San José del Valle, se avanza en el diseño para la rehabilitación de la glorieta de Jardines del Sol, un proyecto que transformará la imagen y vialidad de la zona, obras que conectan, modernizan y benefician a la gente, ***con Héctor Santana, Bahía de Banderas avanza*** *con infraestructura que si se nota, Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, un gobierno hecho para servir."*

Por tanto, se satisface el elemento personal al tratarse de una persona servidora pública, susceptible de incurrir en infracciones a la normativa electoral, y cuya posibilidad de responsabilidad se encuentra latente.

b) Elemento objetivo o material

Sobre este elemento, el análisis del mensaje emitido en las publicaciones denunciadas debe atender no sólo a su contenido literal, sino también considerar el contexto de su emisión[29].

De los mensajes realizados por el Presidente Municipal de Bahía de Banderas Héctor Santana en las difusiones denunciadas, resalta acciones, programas y logros, realizadas por Héctor Santana en su calidad de Presidente Municipal de Bahía de Banderas, advirtiéndose elementos discursivos, semánticos o pragmáticos, que

29 Criterio similar se sostuvo en el SUP-REP-8/2025

constituyen propaganda personalizada, con la intención explícita de influir en la contienda electoral.

Así, como se observa, del contenido de los mensajes difundidos en la estación de radio, no se advierte una alusión directa al informe de gobierno, por lo que lleva a concluir que trata de un ejercicio de comunicación de distinta naturaleza a aquel relacionado con el informe, **sin justificar su difusión fuera del territorio de la jurisdicción que le corresponde gobernar**, ni aportar pruebas para desvirtuar la respuesta del requerimiento de información realizada por el representante legal **XHPY-FM, S.A. DE C.V. concesionaria de la estación de radiodifusión sonora con distintivo de llamada XHPY-FM, en la población de Tepic, Nayarit ("la estación"),** recibida en el IEEN el día ocho de julio de dos mil veinticinco, en la cual establece:

> *"La cobertura de difusión de los referidos spots comprendió diversas localidades del estado de Nayarit, incluyendo específicamente los municipios de **Tepic, Santiago, Compostela, Xalisco y San Blas.***
> *Los "spots" objeto del este fueron transmitidos en las siguientes fechas:*
> ** El "spot" alusivo al Día de las Madres **se difundió del 12 al 31 de mayo** del año en curso.*
> ** El "spot" relativo al liderazgo del alcalde Héctor Santana **se transmitió del 3 al 28 de marzo** del mismo año.*
> *Ambos materiales, programados para emisión en distintos horarios a lo largo del día."*

Como lo ha definido Sala Superior, en el SUP-REP-286/2021, que la propaganda alusiva al informe de labores será auténtica cuando su contenido comunique alguna actividad o acción llevada a cabo por la persona servidora pública en el ejercicio del encargo, la cual puede ser genérica o específica, sin que ello permita un margen ilimitado para que se puedan incluir comunicados ajenos a dichos informes,

porque se debe respetar la finalidad de los mensajes, consistente en dar a conocer las tareas realizadas en un periodo determinado.

En dichos términos, la difusión de los mensajes materia de la controversia, **no** se encuadran en la información gubernamental en sentido estricto, cuyos contenidos sean neutros y su finalidad es informativa y comunicativa, **ni** se relaciona con la rendición de cuentas relativa al informe de labores; por el contrario, se advierte que son una forma de rendir cuentas[30] la cual establece que no deben ser considerados como una forma de comunicación social o propaganda[31].

El uso del lenguaje que prevalece en los mensajes, permite aseverar una apropiación individual de las tareas del gobierno; atribuyéndosele una intencionalidad de aprovechamiento de la posición que ocupa por su cargo, en busca de un beneficio electoral, para sí o para terceras personas.[32]

De las frases que se identifican, en el acto impugnado, se utiliza constantemente la conjugación en primera persona del singular (habla el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana).

Uso personal del lenguaje que denota la intención de atribuir a su persona o a sus atributos individuales los logros obtenidos o las acciones realizadas.

Siendo las siguientes frases, las que se toman de referencia:

ACTUACIONES

30 El artículo 242 de la LGIPE y el 14 de la Ley de Comunicación Social.
31 La clasificación de la información pública gubernamental entre información pública en estricto sentido y propaganda gubernamental deriva del criterio de esta Sala Superior sostenido en el SUP-REP-142/2019
32 criterio similar fue adoptado por Sala Superior en el expediente SUP-PSC-19/2026

"quiero decirles gracias", "hoy les digo cuentan conmigo siempre", "les deseo feliz día de las madres, su amigo Héctor Santana", "bajo el liderazgo del alcalde Héctor Santana", "con Héctor Santana Bahía de Banderas avanza con infraestructura que si se nota".

Actualizándose que la persona servidora pública en su calidad de Presidente Municipal de Bahía de Banderas no se ajustó a los parámetros constitucionales y legales, situación que, como quedó demostrado, pues la propaganda denunciada hizo alusión a su nombre de manera desproporcionada, lo que conlleva a advertir que no tuvo una verdadera intención de informar las actividades llevadas a cabo por el Ayuntamiento a su cargo, sino el impulso de su persona.

a) Elemento temporal

La comparecencia del representante legal de **XHPY-FM, S.A. DE C.V. concesionaria de la estación de radiodifusión sonora con distintivo de llamada XHPY-FM, en la población de Tepic, Nayarit ("la estación"),** recibida en el IEEN el día ocho de julio, acredita que **la cobertura de difusión de los referidos spots comprendió los municipios de Tepic, Santiago, Compostela, Xalisco y San Blas, los cuales fueron trasmitidos** el "spot" alusivo al Día de las Madres **se difundió del 12 al 31 de mayo del 2025** y el "spot" relativo al liderazgo del alcalde Héctor Santana **se transmitió del 3 al 28 de marzo**.

Encontrándose vigente el Proceso Electoral Extraordinario para la Elección del Poder Judicial de Nayarit, resulta evidente que, en esta entidad, no se encontraba en curso algún proceso electoral ordinario, pues el siguiente tendrá inicio el siete de enero de dos mil

veintisiete[33].

Ante ello, no opera la presunción de que la propaganda tenga el propósito de incidir en la contienda y, por tanto, resulta necesario **analizar la proximidad del debate propio de los comicios.**

En ese sentido, resulta necesario precisar que entre la data en que se certificó la existencia de la difusión de los spots de radio denunciados y el inicio del próximo proceso electoral local, existen más de 570 días.

En esa lógica, la sola cercanía en el tiempo no basta para imputar efectos electorales actos de propaganda; sino que, es necesario advertir referencias a elecciones, candidaturas o llamados al voto, o bien que se evidencie una intención de incidir en la contienda o de generar una percepción de inmediatez respecto de un proceso electoral[34].

Por tanto, resulta necesario analizar el contenido de los promocionales denunciados de manera integral y contextual.

Al respecto, como quedó establecido con antelación la propaganda denunciada no cumple con el objetivo de dar a conocer a las personas del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit las acciones del gobierno municipal de ese municipio, pues se colocó en municipios distintos.

Aunado a lo anterior, es posible advertir que el nombre de Héctor Santana es preponderante dentro del material denunciado, en comparación a la referencia que se hace de información

33 De acuerdo al articulo 117 párrafo segundo de la Ley Electoral para el Estado de Nayarit.
34 Similar criterio sostuvo la Sala Superior en el procedimiento SUP-PSC-19/2026.

ACTUACIONES

gubernamental, que ocupó un plano secundario.

Quedando acreditado con las frases de "les habla el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana", "quiero decirles gracias", "hoy les digo cuentan conmigo siempre", "les deseo feliz día de las madres, su amigo Héctor Santana", "bajo el liderazgo del alcalde Héctor Santana", "con Héctor Santana Bahía de Banderas avanza con infraestructura que si se nota", **no se orientan a dar a conocer avances, resultados o logros de la gestión pública municipal a su cargo, sino de posicionar su persona.**

Ante ello, es fuerza concluir que resulta **EXISTENTE** la promoción personalizada a cargo de **Héctor Javier Santana García**, pues la propaganda denunciada hizo alusión a su nombre de manera desproporcionada, lo que conlleva a advertir que no tuvo una verdadera intención de difundir propaganda gubernamental llevadas a cabo por el Ayuntamiento a su cargo, sino el impulso de su persona[35].

En ese sentido, aun cuando no se hayan incluido manifestaciones explícitas de posicionamiento con fines electorales, la colocación deliberada de propaganda relacionada con informe de acciones en cinco municipios distintos, es un aspecto de equivalencia que evidencia la intención de posicionar el nombre del denunciado[36].

En suma, el hecho de haber difundido, en cinco municipios distintos, los anuncios informativos y de carácter social que incluyen acciones realizadas en el Municipio de Bahía de banderas, aunado al análisis de su contenido, permite advertir que la intencionalidad de su

35 Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la tesis LXXVI/2025, de rubro: INFORMES DE GESTIÓN LEGISLATIVA. SU CONTENIDO DEBE ESTAR RELACIONADO CON LA MATERIALIZACIÓN DEL ACTUAR PÚBLICO.
36 Como lo sostuvo la Sala Monterrey en el juicio general SM-JG-9/2026.

difusión se apartó de un verdadero ejercicio informativo de propaganda gubernamental del Gobierno Municipal.

En ese sentido, aun cuando no se hayan incluido manifestaciones explícitas de posicionamiento con fines electorales, la colocación difusión de los spots de radio en cinco municipios distintos, es un aspecto de equivalencia que evidencia la intención de posicionar la persona del denunciado.

Así, la actualización de una conducta ilícita le resulta reprochable al haber aparecido en la difusión de los spots de radio, objeto del procedimiento, generándose así la exaltación de su persona[37].

Vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad y uso indebido de recursos públicos.

En otro orden de ideas, es posible advertir que, mediante la difusión de la propaganda denunciada, se vulneraron los principios de imparcialidad y neutralidad que debía observar el denunciado.

Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior que las personas titulares de los Poderes Ejecutivos de los tres niveles de gobierno deben tener un especial deber de cuidado para no influir en la equidad de las contiendas electorales[38].

Además, la Sala Regional ha sostenido que, atendiendo a las atribuciones de las mencionadas personas del servicio público, se puede presumir que, por la expresión de ciertas opiniones o la realización de algunas conductas, pudiera generarse una presión o

37 Razonamiento análogo al contenido en la sentencia SRE-PSC-98/2023.
38 SUP-REP-163/2018.

influencia indebida en el electorado[39].

Así las cosas, atendiendo a lo razonado anteriormente, dado que los panorámicos implicaron una promoción indebida de la imagen del denunciado, se concluye que faltó a su deber de actuar con imparcialidad y neutralidad, ya que la difusión de su imagen y nombre bajo la apariencia de propaganda gubernamental meramente informativa y de carácter social y conmemorativo, especialmente fuera de su ámbito territorial de gestión, constituyó una influencia indebida que resulta susceptible de incidir en la contienda electoral venidera.

Además, este Tribunal Electoral considera que se acredita el uso indebido de recursos públicos, al haberse acreditado que la difusión de los spots de radio denunciados contravino la normatividad electoral, habiéndose utilizado recursos públicos a cargo del Ayuntamiento de Bahía de Banderas quien contrató con la persona moral YHPY-FM S. A. de FM., tiempo de radio para que, por medio de la estación 93.3 de FM., se difundieran dos "spots", el primero alusivo al día de las madres y el segundo para destacar el liderazgo del ciudadano Héctor Javier Santana García, Presidente Municipal del Ayuntamiento, mismos que fueron difundidos del tres al veintiocho de marzo, doce y treinta y uno de mayo del presente año, en los Municipios **Bahía de Banderas, Tepic, Santiago, Compostela, Xalisco y San Blas, del Estado de Nayarit,** transmitidos en distintos horarios a lo largo de los días indicados y en los cuales se hizo alusión al nombre de **Héctor Javier Santana García, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit,** cuando tenía dicho funcionario la obligación y responsabilidad de preservar

39 SM-JG-5/2026.

imparcialmente el uso de los recursos que tiene a su disposición.

Quedando acreditado con la factura VPN-784 expedida por Radiorama Nayarit, vanguardia publicitaria el Nayar, a favor del Municipio de Bahía de Banderas con expedición quince de abril de dos mil veinticinco, por un importe de $34,800.00 (treinta y cuatro mil, ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al pago por la prestación de servicios especializados, consistente en la generación de contenido para la difusión y promoción del Municipio de Bahía de Banderas del mes de marzo de dos mil veinticinco, así como con el estado de cuenta expedido por BBVA, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, a favor de Vanguardia Publicitaria del Nayar, S.A. de C.V. que corresponde del periodo del 01/03/2025 al 31/03/2025, que consta de 08 fojas con texto por ambos lados, documento que ampara el depósito realizado por el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con fecha de operación 22/MAR-24/MAR- PGO F587 DIFSN GOB MPAL,BMRCASH ref. REFBNTC00772100, por la cantidad de $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional)

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que, tratándose de la infracción referida, lo que se busca evitar es que se utilicen recursos públicos para fines distintos a los institucionales[40].

Bajo esa lógica, se concluye que **Héctor Javier Santana García**, **en su carácter de Presidente Municipal** es responsable por el uso indebido de recursos públicos, al ser el titular del Ayuntamiento de **Bahía de Banderas, Nayarit**, cuyas áreas asignaron recursos para la difusión de los promocionales denunciados.

40 SUP-REP-173/2023.

Ante ello, es **EXISTENTE** la contravención al artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal, atribuible a **Héctor Javier Santana García**.

2. Agravios relativos a la Imposición de la sanción.

En cuanto a la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada, la cual a criterio del recurrente no se encuentra tipificada en la normativa electoral de nuestro estado.

Por su parte la autoridad responsable en la resolución impugnada para la individualización de la sanción atendió el artículo 226 de la Ley Electoral y los criterios emitidos por la Sala Superior en las tesis IV/20186, XXVIII/20037 y CXXXIII/20028, así como lo sostenido en la sentencia del SG-JDC-266/2022 emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Procediendo a calificar la falta, atendiendo el tipo de infracción (acción u omisión), circunstancias de modo, tiempo y lugar, comisión intencional o culposa de la falta, la trascendencia de las normas transgredidas, intereses, valores jurídicos tutelados que se vulneraron o los efectos que pudieron producirse, la singularidad o pluralidad de la falta cometida, las condiciones externas y los medios de ejecución.

Para la individualización de la falta atendió los siguientes elementos: calificación de la gravedad de la infracción, entidad de la lesión, daño o perjuicios, la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones, la condición socioeconómica.

Para ello la autoridad responsable estableció que la conducta del servidor público denunciado, contraviene lo establecido en el artículo 134 párrafo séptimo y octavo, en relación con el artículo 221 fracción III y IX y sancionado por el 225 fracción VII de la Ley Electoral.

Aunado a que el artículo 216 de la Ely Electoral fracción IV, establece que son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales, contenidas en esta Ley, las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes del estado y de los municipios, órganos autónomos locales, y cualquier otro ente público.

Determinando que el denunciado, incumplió con su obligación de preservar el principio de imparcialidad, esto es el de aplicar los recursos públicos que tienen bajo su responsabilidad al realizar promoción personalizada en su favor con el objeto de posicionarlo entre la ciudadanía de Nayarit de cara al Proceso Local Ordinario 2027 en el cual, para el Estado de Nayarit, se renovaran todas las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Calificando la falta como grave ordinaria, tomando en consideración para elegir la sanción, multa de hasta cien veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con el catálogo de sanciones previstas en el artículo 225 fracción VII inciso a) de la Ley Electoral.

Sin embargo, acorde a lo establecido en el artículo 225 fracción VII inciso a) de la Ley Electoral, la cual prevé que, las infracciones que cometan los servidores públicos de cualquiera de los poderes del Estado, del órgano de gobierno municipal, de los organismos

ACTUACIONES

autónomos, de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, y cualquier otro ente público estatal o municipal se sancionarán con:

a) Con amonestación, suspensión, destitución del cargo o multa de hasta cien veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización:

1. A los servidores públicos, estatales o municipales por no prestar el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto Electoral, en tiempo y forma;
2. A los funcionarios electorales que no tengan preparadas oportunamente las boletas electorales, o no las entreguen a los presidentes de las casillas en los términos establecidos;
3. A los miembros de las mesas directivas de casilla que se nieguen, sin causa justificada, a firmar la documentación de las casillas, o que acepten, con conocimiento de ello, una votación ilegal, o que rehúsen admitir el voto de los electores que tengan derecho a sufragar;
4. A los funcionarios electorales que se nieguen a reconocer la personalidad de los representantes de los partidos políticos o de los candidatos, cuando estos comprueben tener la documentación que les acredita como tales, y
5. A los funcionarios electorales que por negligencia extravíen paquetes que contengan votos.

Sin embargo, el mismo artículo establece otro supuesto en el inciso b), el cual establece lo siguiente:

b) Con suspensión, destitución del cargo, inhabilitación para obtener algún cargo público hasta por tres años o multa de hasta ciento cincuenta veces el valor diario de la

Unidad de Medida y Actualización:

1. Al servidor público, estatal o municipal, que presente o haga valer un documento electoral alterado, así como que altere o inutilice alguno;
2. Al funcionario electoral que, por actos u omisiones, impida el cumplimiento de las operaciones de preparación y desarrollo de las elecciones, cause nulidad de una elección, o cambie el resultado de ella;
3. A los servidores públicos que, por favorecer intereses políticos, reduzcan a prisión a los propagandistas, promotores, aspirantes, precandidatos, candidatos o representantes de un partido político o candidato independiente, pretextando delitos o faltas que no se han cometido, y
4. Al servidor público estatal o municipal que contravenga lo establecido en el artículo 245 de esta ley.

En ese sentido este Tribunal Electoral advierte que ninguno de los numerales establecidos en el inciso a) del precepto legal aplicado por la autoridad responsable para la imposición de la sanción atiende la infracción atribuida al denunciado, ni alguno de lo establecido en el inciso b).

En primer lugar, debe señalarse que las autoridades electorales, al resolver los procedimientos especiales sancionadores deben acatar el principio de legalidad y cumplir todas las normas que regulan su actuar, incluso las normas que regulan los posibles efectos de las resoluciones.

En ese sentido, cuando se tramite y resuelva una denuncia en contra de un servidor público por infracciones en contra de la

normativa electoral en los procedimientos especiales sancionadores, las autoridades resolutoras tienen que cumplir y circunscribirse a los efectos que las normas precisan.

En el caso concreto el servidor público denunciado al incurrir en una infracción, el efecto legal necesario es dar vista a su superior jerárquico y, en su caso, a las autoridades encargadas de imponerles las sanciones administrativas correspondientes.

Esta es una obligación expresa prevista en el artículo 457[41] en relación con el articulo 449 fracción d)[42], de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De tal forma que las obligaciones de las autoridades electorales, tanto federales como locales, en asuntos en los que se acredite una infracción por parte de un servidor público **se limitan a dar vista a las autoridades competentes para que impongan las sanciones respectivas**.

Esto es, las facultades de sanción de los servidores públicos no corresponden a las autoridades especializadas en materia electoral, porque si bien, de entre los sujetos que pueden ser objeto de imputación, en términos de lo dispuesto por el artículo 442, apartado 1, inciso f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se incluyen las autoridades o **los servidores públicos**

---

41 **Artículo 457. 1.** Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción prevista en esta Ley, incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto, se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.

42 **Artículo 449. 1.** Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de las servidoras y los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
[El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y candidatas durante los procesos electorales;]

de cualquiera de los poderes locales, no obstante, en el artículo 456 del propio ordenamiento jurídico, en el que se detallan las sanciones que pueden ser impuestas por la realización de las conductas sancionables, **el legislador omitió incluir un apartado respecto de las conductas realizadas por esas autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes locales sin superior jerárquico**; y explícitamente incluyó el citado artículo 457 de ese ordenamiento, que establece las vistas correspondientes.

Además, resulta útil para entender el sistema de sanciones a servidores públicos, retomar la distinción que ha hecho Sala Superior[43] de las dimensiones declarativa y sancionatoria del procedimiento sancionador electoral, la cual consiste en lo siguiente[44]:

a) Las determinaciones de responsabilidad de las autoridades electorales en este tipo de casos son actos declarativos, pues acreditan hechos y determinan situaciones jurídicas, dado que, en las resoluciones que dictan en este tipo de asuntos, tienen facultades para tener por acreditadas las conductas contraventoras de la normativa electoral y para declarar la responsabilidad del servidor público denunciado; y

b) Ante la falta de normas que faculten expresamente a dichas autoridades para sancionar a tales sujetos, los referidos actos declarativos deben ser complementados a través de un acto posterior de carácter constitutivo o sancionatorio, lo que implica la imposición de una sanción a cargo de la autoridad competente como consecuencia de la determinación previa de

43 SUP-JE-167/2021 Y ACUMULADOS
44 Véase SUP-REP-102/2015.

> responsabilidad del servidor público, pues solo así se puede considerar que el sistema normativo tiene una solución apta y eficiente para inhibir la futura realización de infracciones en materia electoral a cargo de servidores públicos.

A partir de ello, Sala Superior concluye que en los procedimientos especiales sancionadores en la materia electoral en contra de servidores públicos, las resoluciones de la autoridad que considera que se acredita una infracción y la responsabilidad de una persona en su carácter de servidora pública, se cumplen y se satisfacen con la sola declaración de la infracción y la responsabilidad y con la vista a los superiores jerárquicos o autoridades encargadas de sancionar, cuando el ordenamiento no establezca una sanción de forma específica.

Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la jurisprudencia 9/2025, de rubro: PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. ALCANCE DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES RESPECTO DE LA INFRACCIÓN Y RESPONSABILIDAD DE UNA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA.

Quienes no cuentan con una persona superior jerárquica como las personas titulares de los poderes ejecutivos, Sala Superior ha determinado[45] que corresponde a los congresos legislativos de las entidades federativas sancionar a las personas servidoras públicas que cometan conductas contrarias al orden jurídico en materia electoral, a fin de hacer efectivo el sistema punitivo de esta materia y, por ende, proporcionarle adecuada funcionalidad.

45 Tesis XX/2016 de rubro "RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. CORRESPONDE A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS IMPONER LAS SANCIONES RESPECTO DE CONDUCTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SIN SUPERIOR JERÁRQUICO, CONTRARIAS AL ORDEN JURÍDICO". Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 128 y 129.

Por consiguiente, la imposición de las sanciones a los servidores públicos, aun por infracciones electorales determinadas por la jurisdicción electoral en casos como en el presente en donde no se establecen sanciones específicas para los referidos servidores públicos, es competencia exclusiva del Congreso, a partir de lo previsto por la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mas no así de la materia electoral.

En consecuencia, si bien es cierto que el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit de conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, tiene libertad de jurisdicción para resolver el procedimiento sancionador y, por ende, para determinar el alcance de sus fallos, sin embargo la imposición de la multa está más allá de sus atribuciones, pues este Tribunal Electoral considera que no tienen fundamento legal alguno y no son acordes con la forma en que las normas aplicables regulan la responsabilidad de los servidores públicos por infracciones electorales, por ello se debe revocar en sus términos, de forma específica, la sanción impugnada.

6.4. Efectos

Se **revoca**, la imposición de la sanción en lo que fue materia de impugnación, la Resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador IEEN-DJ-POS-007/2025, dictada por el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante acuerdo IEEN-CLE-030/2026.

Se **ordena** al Consejo Local que, a la brevedad, emita una nueva sentencia en la que:

a) Queden intocados todos los argumentos confirmados y los que

no fueron materia de impugnación en este juicio.

b) Omita sancionar a Héctor Javier Santana García con una multa equivalente a 100 UMA (Cien Unidades de Medida y Actualización), vigente para el año 2025 -en que se cometió la falta-, a razón de $113.14 (ciento trece pesos con catorce centavos) que asciende a la cantidad de $11,314.00 (once mil trescientos catorce pesos).

c) Se ordene da vista con las constancias atinentes a la mesa directiva del Congreso de Nayarit para los efectos jurídicos conducentes[46].

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se confirma la existencia de la infracción atribuida al ciudadano Héctor Javier Santana García en su carácter de Presidente municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit.

SEGUNDO. Se **Revoca** la resolución impugnada, para los efectos establecidos en el considerando NOVENO de la presente resolución.

46 Véanse las sentencias emitidas en los expedientes SUP-REP-445/2021 y acumulados, así como SUP-REP-151/2022